

Urkullu lamenta «el duro golpe» de la Justicia francesa al euskera

El Consejo Constitucional galo ha tumbado parte de la ley que extendía el modelo de inmersión lingüística en este idioma a la red pública

LORENA GIL

Iñigo Urkullu advirtió ayer de que la decisión de la Justicia francesa de tumbar el modelo de inmersión en euskera supone «un duro golpe para la normalización y recuperación» del uso de este idioma en Iparralde. En su cuenta personal de Twitter, el lehendakari lamentó la resolución dada a conocer el viernes del Consejo Constitucional galo contra la Ley de Protección y Promoción del Patrimonio de las Lenguas Regionales que se aprobó el pasado mes de abril. El órgano judicial se opone, entre otras posibilidades, a que las escuelas públicas puedan ofrecer el modelo de inmersión lingüística en cualquier otro idioma que no sea el francés, por ser este último el único oficial.

La norma en cuestión, que convalidó el visto bueno del Legislativo galo con 247 votos a favor y 76 en contra, se entendía como un paso adelante en defensa de lenguas regionales como el bretón, el corso, el occitano, el catalán y el propio euskera. Pero solo dos semanas después de salir adelante, sesenta diputados la recurrieron. El fallo del Consejo Constitucional ha supuesto ahora un jarro de agua fría. Rechaza la inmersión lingüística en otros idiomas porque «en sus relaciones con las administraciones y los servicios públicos,

los particulares no pueden valer-se del uso de otra lengua que no sea el francés», única oficial para todo el país. Avala las subvenciones a las ikastolas privadas, pero cierra la puerta a que su sistema se extienda a la red pública. Respaldada así que en dichos centros se implante un modelo bilingüe que favorezca el aprendizaje de lenguas regionales, pero nunca por encima del francés.

«Frustración y preocupación»

En este contexto, Urkullu afirmó ayer que el Gobierno vasco se suma al «sentimiento de frustración y preocupación que expresan las instituciones de Iparralde, así como miles de personas en Euskadi y Euskal Herria en su conjunto» porque supone un «duro

golpe para la normalización y recuperación del uso del euskera». El presidente de la Mancomunidad de Iparralde, Jean-René Etchegaray, llegó a calificar la decisión judicial de una «declaración de guerra» a la inmersión lingüística.

«La Carta Europea de las Lenguas Minoritarias o Regionales, que la Asamblea Nacional de Francia suscribió, defiende que las lenguas como el euskera son expresión de diversidad y riqueza cultural y han de ser salvaguardadas», manifestó el lehendakari. Incidió en este sentido Urkullu en que «promover su conocimiento, uso y transmisión supone profundizar en el reconocimiento y respeto de la pluralidad de los pueblos de Europa».



El lehendakari, Iñigo Urkullu, en el Parlamento vasco, EFE

El círculo más cercano a Puigdemont queda fuera del Gobierno de Aragonès

Josep Rius, que estaba en las quinielas para ser el 'número dos', se suma a Elsa Artadi y también renuncia a estar en el futuro Ejecutivo

R. G.

BARCELONA. Carles Puigdemont no tendrá nadie de su absoluta confianza en el Gobierno de Pere Aragonès. Primero fue Elsa Artadi la que rechazó el pasado miércoles ser vicepresidenta y consejera de Economía, y ahora ha sido Josep Rius el que ha descartado para entrar en el nuevo Govern. Su nombre estaba en las quinielas para convertirse en el 'número dos' del Govern y consejero de Acción Exterior. Ambos forman parte del círculo más cercano a Puigdemont, que ha seguido en silencio las negociaciones con Esquerra desde su refugio belga de Waterloo, donde se encuentra huido de los requerimientos de la Justicia española.

Las negativas se interpretan como la expresión del desacuerdo del expresidente de la Generalitat con la negociación llevada a cabo por el secretario general de Junts, Jordi Sánchez, con Esquerra para formar el Gobierno de coalición.

Una disconformidad que no se centra en el reparto de las catorce carteras, que se dividen a partes iguales entre republicanos y posconvergentes, sino en la estrategia soberanista que debería seguir el nuevo Ejecutivo

catalán.

En Esquerra atribuyen los desplantes de Artadi, portavoz de Junts, y de Rius a las pugnas internas de su socio y descartan que esté en peligro el acuerdo. Las diferencias entre Artadi y Sánchez eran un secreto a voces por la resistencia del sector 'puigdemontista' a dar por cerrado el acuerdo sin contrapartidas claras del compromiso de Esquerra con la estrategia independentista. Sánchez soslayó esos reparos ante el riesgo de llegar al 26 de mayo sin acuerdo para la investidura de Aragonès, lo que hubiera motivado la repetición de las elecciones.

En Esquerra preocupa más que Jaume Giró sea el nombre que proponga Junts para Economía porque su trayectoria profesional vinculada a la banca casa mal con las promesas de un enfoque económico de izquierda que ha prometido Aragonès.

Presión de ANC

El problema para ERC es que mientras tanto los colectivos soberanistas siguen con su propia agenda. La presidenta de la ANC, Elisenda Paluzie, pidió ayer al nuevo Govern que avance hacia la independencia, mientras que el vicepresidente de Òmnium Cultural, Marcel Mauri, criticó «la represión del Estado». Lo dijeron en un acto celebrado en Figueres (Girona) para pedir el fin de «la persecución política» de las personas que participan en cortas de carretera en Catalunya tras la sentencia contra los presos por el 1-O.

El precio de la supervivencia

ALBERTO AYALA



Está bien que un presidente de Gobierno piense y haga planes que vayan más allá de los cuatro años que duran las legislaturas. Sobre todo si son el resultado del acuerdo con adversarios políticos, agentes sociales y económicos.

Pero lo que ha hecho esta semana Pedro Sánchez, su plan para 2050, parece más un divertimento que otra cosa. Porque el líder socialista no ha buscado ni ideas ni apoyos más allá de La Moncloa. Y porque las urgencias son otras.

El Gobierno de coalición vive momentos de máxima debilidad. Es evidente que los resultados de las elecciones en Madrid no pueden extrapolarse al conjunto de España. Pero las encuestas confirman que tanto PSOE como UP se encuentran tocados.

El trabajo de GAD 3 que hoy publicamos avanza que de celebrarse ahora elecciones generales habría vuelco. Si en los comicios de noviembre de 2019, los socialistas aventajaron al PP en 7,2 puntos y 31 escaños, hoy el PP parece en condiciones de batir

con claridad a un PSOE que se desploma casi diez puntos y que podría dejarse hasta 17 escaños. Derecha y ultraderecha, además, podrían sumar mayoría en el Congreso.

La izquierda ha jugado estos años con una doble ventaja. La dispersión del voto conservador en tres siglas (PP, Vox y Ciudadanos) perjudica sus expectativas electorales. Y el conjunto de formaciones de izquierdas, nacionalistas e independentistas, que suman un buen paquete de escaños, pueden ser —son de hecho— aliados del PSOE, pero nunca de la derecha, con contadas excepciones como el PNV o los canarios.

No son precisamente buenas noticias para el Gobierno Sánchez en una semana en la que se ha visto obligado a afrontar el desafío de Marruecos en Ceuta, de nuevo con un comportamiento lamentable por parte del

PP de Pablo Casado. Y que conoce desde el viernes que el republicano Pere Aragonès presidirá el Govern de la Generalitat, de nuevo de coalición entre los enemigos irreconciliables, ERC y Junts per Catalunya.

Lo ocurrido al otro lado del estrecho tiene un único responsable: el régimen de Mohamed VI. Claro que el Gobierno español puede acoger y prestar ayuda médica al líder polígrafo. Y Unidas Podemos proclamar su apoyo al referéndum como solución al conflicto del Sahara, como todavía sostiene la ONU. Pero no hubiera estado de más que nuestra ministra de Exteriores obrara con otra prudencia. Porque Marruecos es el gendarme de Europa para frenar la inmigración y contener al yihadismo. Porque se ve más fuerte que nunca sobre el Sahara por el apoyo de Estados Unidos y Francia. Y porque observa debilidad

en nuestro país.

Tras la elección de Aragonès, la mesa bilateral Estado-Cataluña y el poscívulo de los políticos presos por el fallido 'procés' retornan al primer plano de actualidad. El nuevo presidente ha dicho que su objetivo es lograr un referéndum legal y pactado —como el que sigue pidiendo el PNV para Euskadi— para que los catalanes decidan sobre su independencia.

Como semejante exigencia tiene nulas probabilidades de ser atendida, ¿qué ocurrirá después? ¿Volverá el soberanismo catalán a la senda de la unilateralidad? Si esa fuera la perspectiva, ¿caben los indultos? ¿O debemos verlos como contrapartida para que el Gobierno PSOE-UP se garantice la supervivencia?

Sánchez, el PSOE, harían bien en sopesar las consecuencias a corto y medio plazo.